

¿Libertad o coacción?

Políticas lingüísticas y nacionalismos en España



SÍNTESIS

¿Tiene sentido la imposición de la *lengua propia* en detrimento de la lengua común de todos los españoles? ¿Por qué se busca esa imposición? ¿Quién gana con ello? A preguntas como éstas responde el libro *¿Libertad o coacción? Políticas lingüísticas y nacionalismos en España*, coordinado por Xavier Pericay y en el que colaboran también Aurelio Arteta, Xosé María Dobarro, Santiago González, Eduardo Jordá, Jon Juaristi, Amando de Miguel, Agustí Pérez Folqués y Valentí Puig.

El libro es el resultado de una serie de seminarios celebrados en la Fundación FAES y en los que se analizó, comunidad autónoma a comunidad autónoma, cómo el nacionalismo está utilizando el idioma para intentar imponer sus tesis. Los autores analizan el impacto y las consecuencias reales de las políticas lingüísticas aplicadas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Navarra y País Vasco. Llegan en una primera y muy relevante conclusión: el primer problema de las políticas lingüísticas es que, por regla general, han sido impulsadas por el nacionalismo con fines propios del nacionalismo.

Los autores también concluyen que los nacionalistas, al utilizar las políticas lingüísticas como un instrumento más al servicio de su proyecto político, no cumplen el artículo 3 de la Constitución, cuando dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Xavier Pericay, el coordinador del libro, añade que los nacionalistas tampoco “cejarán nunca en el empeño de arrinconar el castellano”. Según destaca, “la lengua se ha convertido en su único estandarte”.

En aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan el PSOE y sus socios nacionalistas, las instituciones son utilizadas para excluir el castellano, hasta tal punto que en Cataluña, por ejemplo, la población castellano hablante no goza de ningún derecho que la ampare en el uso del español. Es un derecho que

los socialistas y sus socios reservan, únicamente, a los catalanohablantes.

Esta forma de aplicar la exclusión a través del idioma llega al punto de que es imposible escolarizar a un niño en la escuela pública de Cataluña para que reciba, al menos, parte de las clases en castellano. Además, la presión nacionalista no acaba en las instituciones, sino que se extiende también en los medios de comunicación privados y en los comercios, con multas a quien no etiquete en catalán, por ejemplo.

Los nacionalistas se han apropiado de la lengua como instrumento de coacción y coerción para todos aquellos que no comulguen con su credo. Así, en el País Vasco, donde la supuesta *lengua propia*, el euskera, no es hablada en la vida cotidiana más que por una reducidísima minoría, “el euskera ha dejado de ser un conflicto para ser un tabú”. Tal como señala Santiago González, uno de los coautores del libro, “se intenta eukaldunizar la Justicia, aunque no hace falta que los jueces aprueben el perfil lingüístico correspondiente; se trata, más bien, de sustituirlos por otros”.

Los autores también concluyen que no en todas las comunidades autónomas se utiliza la política lingüística como instrumento nacionalista. Por ejemplo, Agustí Pérez Folqués opina que, en la Comunidad Valenciana, el “modelo de enseñanza bilingüe diseñado para los centros educativos valencianos pretende que todo el alumno consiga una competencia lingüística por igual en cualquiera de las dos lenguas”. Esta situación de fomentar el bilingüismo es radicalmente opuesta a la de Cataluña. Allí, según señala Pericay, el catalán goza del carácter de “lengua única”.

Una de las conclusiones de este libro es que el Estado debe recuperar la competencia en la promoción y defensa de la lengua que es propia a todos los españoles, y mantener sólo la cesión de competencia lingüística a las autonomías en la lengua que, en su caso, les es propia como idioma cooficial. “Si las Comunidades tienen lenguas propias y lenguas que no lo son, que las comunidades se ocupen de lo propio y dejen lo impropio en manos del Estado. Y que éste recupere, pues unas competencias en materia lingüística que jamás debería haber cedido”, se afirma en el libro.